

Cali, marzo de 2011
No. 17

TRABAJO, PAZ, CALIDAD DE VIDA Y OTRAS REIVINDICACIONES: ACCIONES DE PROTESTA EN EL VALLE DEL CAUCA, 2010

Jorge Hernández Lara

EDITOR:
Comité de Investigaciones
de la Facultad de Ciencias
Sociales y Económicas de
la Universidad del Valle.

Esta es una publicación del
Centro de Investigaciones y
Documentación
Socioeconómica CIDSE de la
Facultad de Ciencias Sociales
y Económicas de la
Universidad del Valle
www.univalle.edu.co <http://socioeconomia.univalle.edu.co>

Participa en este número:
Jorge Hernández Lara
Miembro del Grupo de
Investigación sobre Acción
Colectiva y Cambio Social,
ACASO
jorge.hernandez@correounivalle.edu.co

2010 fue un año en el cual la sociedad vallecaucana experimentó el enorme nivel de riesgo ambiental al cual está expuesta. La más fuerte temporada de lluvias de los últimos cien años produjo inundaciones y deslizamientos en varias partes, afectando áreas productivas, aldeas y barrios, principalmente en las orillas del río Cauca. La explotación de oro arrasó en pocos meses con el cauce del río Dagua, en Zaragoza, al borde de la vía al mar, dejando allí un nuevo paisaje sin vegetación, con charcos de agua maloliente, montículos artificiales de tierra acumulada por retroexcavadoras y túneles en los cuales han seguido exponiendo su vida muchos buscadores de pepitas preciosas, a pesar del desalojo ordenado a finales de año. Poderosos intereses que están a favor de la construcción de un puerto de aguas profundas en Bahía Málaga, sobre el litoral Pacífico, trataron de impedir que la zona fuera declarada como parque natural, cosa que finalmente no lograron, aunque han anunciado que insistirán si es necesario hasta por treinta años en la idea de que allí se construya el puerto. Paradójicamente, no se produjo durante este año una sola acción colectiva orientada a la protección del medio ambiente en el Valle del Cauca, al menos no con el impacto requerido para que mereciera ser registrada en los medios de comunicación que nos sirven como fuente de datos en esta ocasión: *El País* (impreso), *elpais.com* y *eltiempo.com*.

Por otro lado, otra paradoja, en estos tiempos que muchos consideran «postmodernos»: un motivo tan viejo y poco espectacular como es la búsqueda de condiciones de trabajo, incluido el elemental pago oportuno de salarios, estuvo en la base de casi una tercera parte del total de acciones colectivas realizadas durante el año en la región, mientras que las reivindicaciones asociadas con luchas identitarias abarcan si acaso el 13%. Al margen de las expectativas que despiertan ciertas ideologías, como el multiculturalismo, siguen predominando en estas tierras las acciones de quienes se preocupan principalmente por asegurar el sustento diario de ellos y sus familias: mineros, conductores y pequeños propietarios del transporte urbano, dueños de embarcaciones de cabotaje, mototaxistas, camioneros, corteros de caña, recicladores y vendedores ambulantes, entre otros.

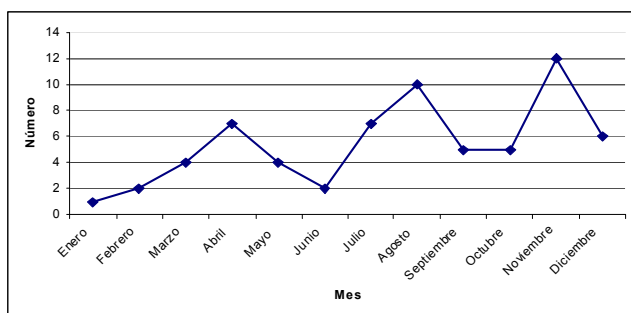
Veamos esto más despacio: primero, cuál fue la dinámica general de la acción de protesta durante el año, luego las metas que se invocaron para realizarla, después las modalidades que adoptó y, finalmente, algunos rasgos destacados del contexto en el cual se desarrolló.

Juvenimos el mes más movido

Fue un año electoral, hubo urnas abiertas los domingos 14 de marzo: para votar por Senadores y Representantes a la Cámara, 30 de mayo: primera vuelta para elegir Presidente, y 20 de junio: segunda vuelta presidencial. Un primer semestre dominado por campañas electorales, en donde el protagonismo estuvo a cargo de partidos y líderes políticos, coincidió con un menor grado de intensidad en la acción colectiva, que está siempre a cargo de sectores y organizaciones sociales: hubo 20 entre enero y junio, 45 entre julio

y diciembre, tal como lo muestra el Gráfico 1. No obstante, fue entre finales de marzo y comienzos de junio que se presentaron las dos acciones de más larga y continua duración: por un lado, un paro de los dueños de embarcaciones de cabotaje en varios poblados del litoral Pacífico, entre el 23 de marzo y el 9 de abril, para evitar la suspensión de un subsidio gubernamental al acpm que usan como combustible, objetivo que lograron, y por otro lado, un bloqueo de corteros de caña en el acceso al Ingenio María Luisa, buscando que la cooperativa de trabajo a la que pertenecían fuera nuevamente contratada por la empresa, entre el 19 de abril y el 10 de mayo, cuando una tutela los obligó a desalojar.

Gráfico 1
Volumen y ritmo de la acción colectiva en el Valle del Cauca, 2010



Agosto y, sobre todo, noviembre fueron los meses que concentraron mayor cantidad de acciones. Las de agosto estuvieron a cargo de trabajadores de Emcali, la rama judicial y el Hospital Universitario del Valle, mineros de Zaragoza, activistas del sector LGBT, vendedores ambulantes de Buenaventura, estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, habitantes de la Comuna 20 de Cali, víctimas de la violencia paramilitar en Buenaventura y miembros de un grupo de teatro experimental comunitario de Cali. Las de noviembre fueron protagonizadas por familiares de secuestrados, pequeños comerciantes de Cali, habitantes de los municipios del norte del departamento, propietarios de predios al borde de carreteras en construcción, corteros de caña, estudiantes del Instituto Popular de Cultura de Cali, mineros venidos del norte del Cauca, mujeres, pequeños transportadores, carretilleros y hasta niños y jóvenes que marcharon en Aguablanca por «el futuro».

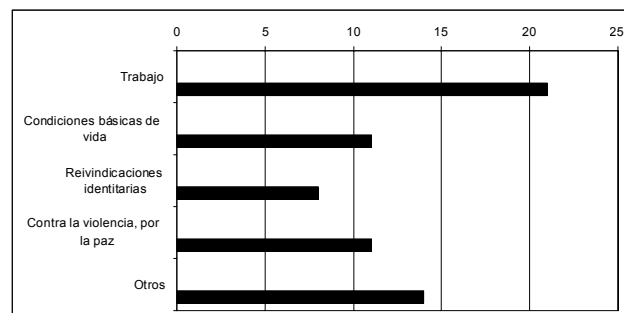
No queda fácil determinar qué pudo haber provocado la mayor concentración de acciones en agosto y noviembre, aunque cabe una conjetura: la agitación política siguió predominando en el Valle del Cauca, aún después de la elección presidencial, precisamente hasta agosto, debido a que el Gobernador del Departamento, Juan Carlos Abadía,

fue acusado, investigado, encontrado culpable y finalmente destituido e inhabilitado por haber participado en política a favor de uno de los precandidatos a la Presidencia. A comienzos de agosto la sanción quedó en firme y entonces fue designado un Gobernador encargado, en torno a él se alinearon rápidamente los principales círculos del poder regional con el propósito, primero encubierto y luego cada vez más explícito, de evitar la realización de elecciones atípicas para escoger nuevo Gobernador en propiedad, cosa que al final lograron. De esta manera, a partir del 6 de agosto se habría configurado una situación en la cual la agitación política tendió a la baja y la acción colectiva encontró mejores oportunidades de expresarse, sobre todo en el penúltimo mes del año. Pero, como ya se dijo, esta es apenas una conjetura.

Los fines: sí al trabajo, no a la violencia, sí a mejores condiciones de vida

Tal como se señaló al comienzo y puede verse en el Gráfico 2, los propósitos mayoritariamente invocados por los protagonistas de la acción colectiva correspondieron a cuestiones relacionadas con el trabajo y, en segundo lugar, en idéntica proporción, a la búsqueda de paz, por una parte, y la creación de condiciones básicas para la vida en sociedad, por otra parte.

Gráfico 2
Metas de la acción colectiva en el Valle del Cauca, 2010



Motivaciones más específicas agrupadas en la búsqueda de condiciones de trabajo, 32.3% del total, fueron: obtención de permisos y licencias para la explotación minera, arreglo de vías y mantenimiento de subsidios para el transporte público, localización de escombreras en las ciudades, reintegro de despedidos, pago de salarios retrasados, cuotas de participación en pequeñas empresas. La brega por mejores condiciones básicas de vida, un 16.9 % del total, se concentró en acciones que reclamaban acceso a salud, educación, justicia y agua, con suficiente calidad.

Las acciones contra la violencia y por la paz, un 16.9 % del total, no agrupan cosas más específicas, resultarían ser el principal motivo de la acción colectiva regional si el análisis se hiciera con base en la frecuencia de las motivaciones

desagregadas. La alta presencia de este tipo de acciones no resulta nada raro si se tiene en cuenta que uno de los rasgos del contexto de la acción durante todo el periodo fue la abundancia de expresiones de violencia y conflicto armado, prolongando una tendencia que venía de antes: «El año pasado, el Valle tuvo 137.718 desplazados», tituló un diario regional en los primeros días del nuevo año (*El País*, 22 de enero de 2010, A2), «Cali está armada hasta el alma», poco después de la mitad (*El País*, 15 de agosto de 2010, A2), «Preocupan acciones de ‘Rastrojos’ y Farc en el Valle», en vísperas de la navidad (*El País*, 23 de diciembre de 2010, A8).

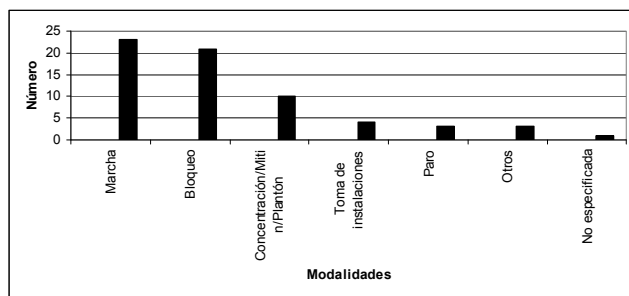
Las motivaciones derivadas de reivindicaciones identitarias, protagonizadas por sectores sociales específicos, un 12.3% del total, fueron invocadas durante el año por jóvenes, mujeres, indígenas y activistas del sector LGBT. Otras motivaciones, no agrupadas en las categorías antes mencionadas, un 21.6% del total, se refirieron al cumplimiento de pactos firmados entre los gobiernos y las comunidades, el desarrollo regional, la afectación derivada de la construcción de obras públicas, la privatización de empresas públicas, la posible firma de Tratados de Libre Comercio y la conmemoración del día del trabajo.

Las modalidades: marchas y bloqueos, principalmente

Las acciones colectivas que aquí tenemos en cuenta se realizan, por definición, en espacios públicos físicos, tales como calles, plazas, carreteras, puentes, cruces de vía, monumentos, instalaciones, entradas y salidas, etcétera, bien sea urbanos, rurales o semiurbanos. De estas acciones colectivas –públicas, materiales, no privadas, no virtuales–, es que encontramos 65 registradas en nuestras fuentes para el Valle del Cauca durante 2010. Como lo muestra el Gráfico 3, las modalidades más utilizadas por quienes se movilizan fueron la marcha y el bloqueo, seguidas de las concentraciones o formas similares de acción.

Gráfico 3

Modalidades de acción colectiva en el Valle del Cauca, 2010



En el 35.3% de los casos se recurrió a marchas y en el 32.3% a bloqueos, de tal manera que estas dos modalidades,

juntas, representan un 67.6%, las dos terceras partes, de todo el repertorio de la acción colectiva en la región vallecaucana. Es una cifra significativa. Las marchas fueron prácticamente todas urbanas, se realizaron en las calles de las ciudades, solo una transitó por carreteras del norte del Departamento con gente encima de tractores y otros vehículos. Los bloqueos ocurrieron, en cambio, principalmente en las carreteras intermunicipales, 16 de 21, aunque también los hubo en calles y, al menos en un caso, el acceso a instalaciones situadas en zona rural. La tercera modalidad más preferida fue la de concentraciones, mítines, plantones o similares, en espacios urbanos y, excepcionalmente, semiurbanos: la entrada a un Ingenio y una carretera en el centro del Departamento. Toma de instalaciones, una forma de acción más retardora que otras, hubo en cuatro casos, todos en área urbana: desplazados ocuparon una iglesia en Cali, vendedores ambulantes otra en Buenaventura, mineros de Suárez (Cauca) se tomaron dos veces la sede de Ingeominas en Cali. Al paro de actividades, una modalidad muy exigente para quien la realiza, se acudió en tres casos: los dueños de embarcaciones de cabotaje suspendieron actividades en Buenaventura y otras poblaciones del litoral, pequeños transportadores lo hicieron para presionar su inclusión en los esquemas empresariales del MIO en Cali y conductores de una de esas empresas pararon para reclamar el pago de sus salarios. Formas de acción poco habituales también hubo: un vía crucis en la carretera, llegando a Buenaventura, y un cacerolazo, pequeño, en las calles centrales de Cali.

Algo sobre el contexto: realineaciones y divisiones entre elites

Tanto las autoridades gubernamentales, y los círculos políticos ligados a ellas, como las elites económicas intervinieron activamente en la dinámica regional del periodo, sobre todo en torno a tres asuntos: orientación del gobierno departamental, minería en Zaragoza y puerto o parque en Bahía Málaga.

En las elecciones de marzo de produjo una sorpresa: la cantidad de votos depositados en el Departamento aumentó un 32.8%, hubo claros indicios de que ese incremento se debía en buena medida a la inversión desusada de dinero en la compra de votos, se presentaron otras formas de fraude electoral que posteriormente fueron comprobadas por el Consejo Nacional Electoral, resultaron elegidos como Senadores y Representantes varios candidatos desconocidos, que no expusieron sus propuestas en los medios de comunicación durante la campaña, ni tenían experiencia política o administrativa previa en el sector público, la mayor parte de ellos afiliados al PIN, Partido de Integración Nacional. Este partido había incrementado su presencia en el Valle del Cauca a comienzos de año, cuando

se vincularon a él las huestes de ADN, Alianza Democrática Nacional, otro nuevo partido al cual las autoridades electorales le negaron reconocimiento legal, debido a que se había constituido irregularmente por iniciativa de promotores que se encontraban reclusos en distintas cárceles, acusados de haber tenido vínculos con paramilitares y otras formas de criminalidad. Entre los que llegaron al PIN, viniendo de ADN, estaba la estructura política del gobernador J. C. Abadía, su padre y su familia, el original Movimiento Popular Unido que luego había formado parte de Equipo Colombia y Convergencia Ciudadana. Los resultados de marzo daban a entender que una nueva fracción de elite política se estaba consolidando en la región, gracias al respaldo de círculos mafiosos y al uso de mecanismos ilegítimos para obtener cuotas de poder. Las elites políticas establecidas reaccionaron entonces fuertemente contra la amenaza representada por esa fracción emergente. Se pidió el recuento de todos los votos depositados en el Departamento, se sugirió la posibilidad de anular las elecciones, aparecieron las primeras evidencias contra el gobernador Abadía por su activa participación en política, se produjo su destitución, el nuevo Vicepresidente de la República intervino proponiendo «un gran pacto por el Valle del Cauca» y contribuyó a que un dirigente empresarial de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos fuera designado como gobernador encargado, éste emprendió una cruzada contra la corrupción en las entidades que controlaban agentes del anterior gobierno departamental (Fábrica de Licores del Valle, CVC, Acuavalle, entre otras), se presionó al Gobierno Nacional para que suspendiera indefinidamente las elecciones atípicas que debían realizarse para escoger nuevo Gobernador en propiedad. El realineamiento producido puso del mismo lado a las elites políticas establecidas, los círculos empresariales y el exgobernador, ahora vicepresidente, Angelino Garzón, a pesar de que éste y aquellos no se entendían muy bien previamente.

La disputa en torno a la conveniencia o inconveniencia de permitir la explotación minera en Zaragoza produjo otro tipo de alineaciones. Mientras el gobierno municipal de Buenaventura y el gobierno departamental presidido por J. C. Abadía se mostraron siempre proclives a permitir allí la minería, con el argumento de que esa era una manera de producir empleo, el nuevo Gobernador encargado del

Departamento y el Gobierno Nacional optaron por prohibirla, debido al enorme deterioro ambiental y social que producía, mientras los círculos empresariales vacilaban entre una y otra opción, con la esperanza de que la actividad pudiera ser reglamentada y organizada. Quienes más se beneficiaron con la explotación no fueron los mineros artesanales que desde siempre han vivido del barequeo en los ríos del Pacífico, sino unos cuantos «inversionistas» que llevaron decenas de retroexcavadoras e impusieron precios y sometieron a los más débiles, incluso con violencia. Los bloqueos intermitentes realizados durante el año en la vía al mar frente a Zaragoza, al menos cuatro (junio, agosto, septiembre y octubre), uno de siete horas, fueron realizados por esa mezcla de mineros artesanales necesitados de sustento e inversionistas depredadores. El saldo final fue un desastre ambiental a cielo abierto, a los ojos de todos.

Como se dijo al comienzo, otro desastre ambiental estaría en gestación si las elites económicas de la región hubieran logrado imponer sus intereses en la definición de qué hacer con Bahía Málaga. Desde comienzos del año los empresarios, encabezados por la Andi, lanzaron una campaña en contra de la declaratoria del área como parque natural, con el argumento de que ese era el mejor sitio para construir un puerto de aguas profundas para el comercio internacional en la cuenca del Pacífico. Los nativos, las ONG's ambientalistas, casi todos los expertos y el Ministerio del Medio Ambiente (y Vivienda), se inclinaron a favor de la creación del parque natural, cosa que se protocolizó el 17 de septiembre.

Los realineamientos y las divisiones que constantemente se producen entre autoridades gubernamentales, círculos políticos y elites económicas, son apenas una de las variables que hacen parte del contexto en que se desenvuelve la acción colectiva, pero no deja de ser sugestivo comprobar que los protagonistas de la acción contaron en algunos casos con aliados influyentes y en otros con mayores oportunidades, a raíz de esos realineamientos y esas divisiones. Así, La división en torno a la orientación del gobierno departamental contribuyó a crear mejores condiciones para la acción después de agosto. Las vacilaciones sobre la minería en Zaragoza facilitaron la acción colectiva de los mineros casi todo el año. Las divisiones a propósito de Bahía Málaga brindaron una gran oportunidad para la acción ambiental, a pesar de que esta, extraña y paradójicamente, no se produjo.